

Gefe de reemplazos, O. teniente coronel Fernando Gonzalez, para que continúe sus procedimientos supuesta la denegacion del amparo, omitiéndose la imposicion de la multa de que trata y designa el artículo 16 de la ley de 20 de Enero citada, atendida la insolvencia de Silva, justificada en autos. Hágase saber, expídanse las copias correspondientes á las redacciones de periódicos á quienes de costumbre se les mandan para la publicacion de este fallo, y elévese este expediente á la Suprema Corte de Justicia.

El O. Lic. Ramon Ortigoza definitivamente juzgando, así lo sentenció y firmó: doy fé.—*Ramon Ortigoza.*—*Francoisco del Valle.*

Es copia que certifico. Toluca, Junio 25 de 1872.—*Lic. Francisco del Valle,* secretario.

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio cuatro de mil ochocientos setenta y dos.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de México por Dionisio Silva contra el Gefe político de Tenango del Valle que lo consignó al servicio de las armas, y Considerando: que en el expediente aparece, que aunque Silva fué aprehendido en el pueblo de San Antonio de la Isla el veinticuatro de Abril de este año, para destinarlo al servicio de las armas, se lo consignó á él en principios de Mayo último: que el quejoso es casado: que la ley vigente sobre suspension de garantías excluye á los casados de ser obligados á servir en el ejército, y que por lo mismo se ha atacado en la persona de Silva la garantía que consigna el artículo 5º de la Constitucion Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la misma, se declara: que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada el veinti-

cinco de Junio próximo pasado por el juez de Distrito del Estado de México que negó el amparo á Dionisio Silva y se decreta: que la Justicia de la Union lo ampara y protege contra el acto que lo consignó al servicio de las armas.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de Distrito de que procede con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los señores Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogaszon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Artega.*—*Ignacio Ramirez.*—*José Mº del Castillo Velasco.*—*M. Arza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Julio ocho de mil ochocientos setenta y dos.—*Lic. Agustin Peralta,* oficial mayor.

PAPEL SELLADO.—Diligencias practicadas en el Juzgado de 1ª instancia de Cuadalcázar y el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, contra D. Manuel Rascon por infraccion de la ley de papel sellado.

ACTA CON QUE COMENZO EL JUICIO.

En la ciudad de San Luis Potosí á los veinticinco dias del mes de Agosto de mil ochocientos setenta y uno, presentes los CC. Gefe de Hacienda, llevando la voz Fiscal, Manuel Rascon y su abogado patrono Lic. Ignacio Arriaga, dijo el primero: que pide al Juzgado se imponga al Sr. Rascon la multa del diez por ciento sobre la cantidad de \$25,464 16 veinticinco mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos diez y seis centavos que es la partida mayor del cargo que consta en

la cuenta que ha presentado el apoderado del Sr. Rascon, sin extenderla en el papel del sello correspondiente, segun los artículos 51 y 53 de la ley de 14 de Febrero de 1856. El C. Manuel Rascon, por conducto de su abogado patrono, contestó: que pide al C. juez se sirva declarar que no ha incurrido en la multa que demanda el C. Promotor Fiscal, porque el documento á que se le quiere aplicar no es otra cosa que un escrito de demanda que siempre y en todos casos debe extenderse en papel del sello tercero para actuaciones *"en todo memorial peticion ó demanda civil intentada en todo Tribunal secular ó eclesiástico"* (artículo 17, partida 2ª,) y esto ya sea que la demanda contenga ó no operaciones numéricas que muchas veces son necesarias para deducir al fin la peticion; que hasta hoy no hay ninguna ley que prevenga á los abogados la forma en que deban presentar sus demandas, respecto al punto de que se trata, y la razon es, porque en tal caso seria muchas veces imposible exponer los hechos en que se fundan las acciones civiles; que las verdaderas cuentas de este juicio y de donde procede la demanda (lo cual prueba que no son una misma cosa), aun no se presentan en el litigio, lo cual está probando patentemente la injusticia de la demanda puesta por el C. Promotor Fiscal; que aun tratándose de cuentas y facturas, las que deben extenderse en papel sellado, segun el artículo 36, son las que se giren entre los particulares, comerciantes y corporaciones de cualquier orden y clase *para el efecto de cobrar su importe* y no se comprende cómo una demanda que está en principio á discusion sea una cuenta reconocida para cobrar; que conforme á los artículos 59 y 60 de la ley citada, solo los jueces, gefes de oficina y demas funcionarios son los que tienen obligacion de perseguir las faltas semejantes á la que aquí se supone, no procediendo para ello accion popular, con lo cual está

demostrado que D. Ramon Zubiaga no ha tenido derecho para hacer ninguna denuncia, así como tambien que en el caso se le ha de imponer una pena como falsario y condenársele en todos los daños y perjuicios que al que habla se le sigan, una vez que el citado Zubiaga ha asentado una falsedad asegurando que se trata de una cuenta y no de un escrito de demanda, con lo cual ha sorprendido al C. Administrador general de la renta del papel sellado en México; que el mismo Administrador subalterno de Guadalcázar ha incurrido en una notoria responsabilidad extrayendo el expediente del Juzgado de 1ª instancia de aquella ciudad, supuesto que conforme al artículo 60 ya citado, los Administradores de la renta solo pueden hacer requerimientos para que se les exhiban los documentos que crean incursos en la multa, y *aun en el caso de tener evidencia de cualquiera infraccion* deben ocurrir á los jueces de Hacienda, hoy de Distrito, para que resuelvan lo conveniente sin atropellar las funciones judiciales, entorpeciendo negocios que son de por sí llanos y sencillos; que aquí solo trata D. Ramon Zubiaga como demandado, de entorpecer con notoria temeridad el litigio que se le ha promovido; que por todo lo dicho concluye pidiendo: primero, que se declare que el que habla no ha incurrido en la multa que se le demanda, conforme al artículo 17, partida 2ª de la ley; segundo: que se le haga efectiva la responsabilidad al Administrador subalterno de la ciudad de Guadalcázar, conforme á los artículos 53 y 60 de la ley, no solo imponiéndole la multa sino suspendiéndolo de su cargo por inepto; tercero: que se condene á D. Ramon Zubiaga como falsario, y mandando le satisfaga al que habla los gastos, daños y perjuicios que al que contesta se le han seguido y se le seguirán por tan temeraria é infundada denuncia.

Áutos con citacion, haciéndose cons-

tar previamente, que la cuenta que corre agregada á estas diligencias, es la que está en el cuerpo del escrito de demanda presentado por el apoderado de D. Manuel Rascon, en el expediente que ha recibido el C. juez de Guadalcázar y que se le devolverá.

En el acto, enterados los CC. Promotor Fiscal, Manuel Rascon con su apoderado patrono, dijeron lo oyen. Con lo que concluyó esta acta que firmaron.—*Lic. Cipriano Martinez.*—*Lic. Ignacio Arriaga.*—*Manuel Rascon.*—*Rafael Guzman.*—*Cárlos E. Murgain.*—*Vicente Ezriga.*

SENTENCIA del C. juez de Distrito.

En la Ciudad de San Luis Potosí, á los dos dias del mes de Setiembre de 1871. Vistas las presentes diligencias practicadas para poder decidir si D. Manuel Rascon ha incurrido en la multa que señala la ley de 14 de Febrero de 1856, por haber formado una cuenta en el escrito de demanda, que el 5 de Diciembre del año próximo pasado presentó ante el juez de 1ª instancia de Guadalcázar, cuyas diligencias tuvieron principio en virtud del escrito de denuncia presentado por D. Ramon Zubiaga, al que si ya no se ha oído es, porque manifestó que nada tenia que exponer, pues que á los Tribunales convenia resolver si el Sr. Rascon habia ó no incurrido en la multa. Considerando: que *cuenta*, no es mas que “el pliego ó papel en que está escrita alguna razon, compuesta de varias partidas que al fin se suman ó restan,” y segun el artículo 36 de la ley ya citada, las facturas y cuentas que deben extenderse en los sellos designados por los artículos 34 y 35 son las que se jiren entre los particulares, comerciantes y corporaciones de cualquiera orden y

clase para el efecto de cobrar su importe, de cuya naturaleza es la cuenta presentada por el apoderado del Sr. Rascon, pues ha sido formada con objeto de cobrar su importe á D. Ramon Zubiaga, motivo por el que debió extenderla en el papel sellado que designa la ley. Considerando: que no es de tenerse presente las razones alegadas por el repetido Sr. Rascon, porque aunque el artículo 17, en su fraccion 2ª previene que en toda demanda civil intentada ante los Tribunales se use papel del sello tercero, esto no impide que las cuentas se pongan en el sello señalado por los artículos 34 y 35, despues de lo que ya puede la parte hacer reunion en su demanda de las operaciones numéricas que contiene dicha cuenta. Considerando: que el repetido artículo 36 no se refiere á cuentas reconocidas, como asegura el Sr. Rascon, y que de que tenga que exhibir nuevas cuentas para probar la que presentó en su escrito de demanda, no se sigue que no lo sea la que manifestó al Juzgado, exigiendo su pago. Considerando: que conforme al artículo 51 de la repetida ley de 14 de Febrero de 1856, por la falta del respectivo sello en las cuentas, debe exigirse una multa de cinco por ciento sobre la suma mayor del cargo, con fundamento del citado artículo, debia de fallar y fallo. Primero: se condena á D. Manuel Rascon al pago de cinco por ciento sobre la suma mayor del cargo, que es la de veinticinco mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos, diez y seis cs. Segundo: prevengase al C. Promotor fiscal, promueva lo conveniente respecto á los que han admitido dicha cuenta, así como á los demas que hayan incurrido en la pena que designa la ley. Tercero: sáquese copia de esta sentencia y remítase al “Semanao Judicial” para su publicacion. El C. Lic. Cipriano J. Martinez, juez de Distrito del Estado lo mandó y firmó: damos fé.—*Lic. Cipriano J. Martinez.*

—A. Vicente Exiga.—A. Rafael Guzman.

Son copias que certifico. San Luis Potosí, Setiembre 18 de 1871.—Lic. C. J. Martínez.—Rafael Guzman.—Vicente Exiga.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL
DEL TRIBUNAL DE CIRCUITO.

C. Magistrado de Circuito:

El Promotor fiscal dice: que en el expediente promovido por el C. Lic. Benigno Arriola, apoderado de D. Manuel Rascon contra D. Ramon Zubiaga, ante el Juzgado 2º popular de Guadalcázar; en el Estado de San Luis Potosí, se presentó por el actor una cuenta cuya mayor suma es de veinticinco mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos, diez y seis cs. y cuya diferencia es de trece mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos cincuenta y un cs. Esta cuenta se halla extendida en papel del sello tercero, propio y especial para actuaciones, segun el certificado del juez popular mencionado, fojas 5.

Con esta fehaciente prueba no dudó, el C. juez de Distrito de San Luis Potosí, condenar, conforme al artículo 15 de la ley de 14 de Febrero de 1856, al referido Rascon, al pago de cinco por ciento sobre la predicha suma mayor de cargo, de la cuenta así presentada. En esta 2ª instancia se amplió la indagacion sobre el hecho, resultando, que la cuenta que ha dado margen al juicio actual formaba parte del escrito de demanda en el incluido, en vez de ir como documento separado adjunto al precitado escrito. Así consta de la copia íntegra, literal y certificada por el C. juez de Distrito, la cual obra á fojas 14 de este cuaderno.

Cambia, por lo mismo, enteramente la naturaleza de la cuestion. No cabe du-

da sobre la necesidad de practicar operaciones numéricas en una demanda; y ningun escrito en que esta se inicie es costumbre presentarlo en dos distintas clases de papel, á saber: de actuaciones y de facturas, cuentas y recibos. La operacion numérica en la demanda, es una cuenta, pero en un sentido mas lato que el especial y terminado, aplicable á una liquidacion comercial. Quando la interpretacion usual, fundada en la práctica constante de los Tribunales, no nos sirviera de base para resolver el caso presente, la misma ley de 14 de Febrero en su artículo 51, seria bastante para hacernos comprender con su simple lectura, que la pena del cinco por ciento sobre la mayor suma, se impone por la falta del sello respectivo en las facturas, cuentas y recibos, tanto al que produce esos documentos como al que los admite. Ampliar esta disposicion á una ó varias explicaciones contenidas en un escrito de demanda, que por su naturaleza debe encerrar operaciones de esa clase, para fijar su monto, es coartar la libertad de producirse en él y ordenar la confusion y la oscuridad en vez de la claridad preceptuada por las leyes, y cuya falta dá la excepcion dilatoria de *oscuro ó inepto libelo*.

La fraccion 2ª del artículo 17 de la ley de papel sellado, faculta, ó mas propriamente, impone, á los que elevan un memorial ó peticion, la necesidad de hacer uso del sello tercero de actuaciones, cualquiera que sea el Tribunal á que se dirijan. Con esta obligacion cumplió la parte del Sr. Rascon, y si en ella mencionó cantidades, fué porque toda demanda tiene por objeto el reclamo de una suma pecunaria ó cosa que lo vale.

¿Pues qué, cuando se pide la revindicacion de una propiedad raíz, con los frutos pendientes y percibidos, no se pide ademas de la misma cosa una indemnizacion pecuniaria? ¿Quando la falta de cumplimiento en un contrato ha oca-

sionado perjuicios, y se pide la satisfaccion de estos, no se persigue una cantidad en metálico? Siendo la moneda la medida de todas cosas, tiene que figurar en todas las demandas que tienen por objeto la consecucion de las primeras. Y cuando aquellas han desaparecido, queda su estimacion en muchos casos, conforme á las leyes.

Por esto, aun en las mismas obligaciones de hacer, se demandan los daños y perjuicios (*id quod interest.*) Y á nadie ha ocurrido hasta hoy, que la cantidad líquida que se debe demandar en un juicio ejecutivo se exprese fuera del escrito y en papel de cuentas, aunque cuenta se forme en el memorial para liquidarla y pedir su pago.

En vista de estas reflexiones, el Promotor fiscal cree: que debe absolverse de la demanda al O. Manuel Rascon, revocándose la sentencia del C. Juez de 1.^a instancia. Así lo pide al Tribunal.

Querétaro, Febrero 8 de 1872.—*Luis Castañeda.*

SENTENCIA del Tribunal de Circuito.

Querétaro, Marzo 16 de 1872.—Vista la apelacion que interpuso D. Manuel Rascon, en siete de Setiembre del año próximo pasado, de la sentencia de 1.^a instancia, pronunciada en juicio verbal por el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí en 2 del propio mes y año, condenándolo al pago de una multa de cinco por ciento sobre la cantidad de veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos, diez y seis centavos, en virtud de la denuncia que hizo D. Manuel Zubiaga, á quien demandó Rascon por medio de su apoderado Lic. D. Benigno Arriola, ante el alcalde 2.^o de Guadalcázar, con funciones de juez de 1.^a instancia, la cantidad de trece mil y pico de pesos como resultado de la compañía de

Tomo III.—Parte II.

campo que tuvieron los dos, y habiendo formado Rascon una cuenta de “Debe y Haber” escrita con guarismos en el cuerpo del escrito de demanda, en la que figura como mayor cantidad la expresada de veinticinco mil y tantos pesos, la que por lo mismo está en el sello tercero de actuaciones, lo denunció su demandado de “haber presentado un documento que no está escrito en el papel del sello correspondiente,” y de “haber incurrido en las penas que designa el artículo 53 de la ley de 14 de Febrero de 1856:” visto el referido escrito de denuncia de D. Ramon Zubiaga, á fojas 1.^a del expediente; el auto del juez de Guadalcázar de 1.^o de Julio, á fojas 3 vuelta; el certificado expedido por el mismo, á fojas 5; el documento de depósito de la multa, á fojas 12; la acta del juicio celebrado ante el juez de Distrito en 20 de Agosto, de fojas 16 á 18, con la certificacion de su calce; la sentencia apelada de fojas 18 vuelta; la apelacion que introdujo D. Manuel Rascon, á fojas 20; la prueba rendida en esta segunda instancia, á fojas 14 del Toca; lo alegado por el O. Lic Manuel Mendiola, apoderado del apelante, á fojas 20 idem; lo pedido por el O. Promotor Fiscal, á fojas 13 idem, con todas las demas constancias de autos que ver convino, y considerando 1.^o: que aunque tanto en el escrito del denunciante D. Ramon Zubiaga, como en el auto de 1.^o de Julio del juez de Guadalcázar, se pretende dar á entender, que aparte ó fuera del escrito de demanda, el apelante ha presentado un “documento” ó “cuenta” escrita en papel de actuaciones y no en el de cuentas y recibos correspondiente á su cuantía; habiendo llegado el propio juez hasta á segregar del propio escrito la cuenta formada en él y testimoniádola aisladamente en la certificacion de fojas 5, como si no estuviera inclusa en el cuerpo del mismo; lo cierto es, que las constancias de autos y con especialidad la prueba

rendida en esta instancia, justifican: que la cuenta de que se trata, está narrada en el cuerpo del repetido escrito, como parte del mismo y no como pieza separada de él, en cuyo caso la cuestión del presente juicio está reducida á decidir, si conforme á la ley de papel sellado las cuentas que se formen en los escritos de demandas, para explicar estas, deben ponerse aparte y en otro papel que el de los propios escritos. Considerando 2º: que en la ley no se encuentra disposicion literal ni interpretativa que establezca tal obligacion. Considerando 3º: que ademas de esto, la cuenta formada por D. Manuel Rascon, en el repetido escrito, no tiene otro carácter que el de puramente narrativa ó explicatoria de las diversas partidas de que se compone la cantidad que deduce en su demanda, y advierte que éstas, en su caso, serán comprobadas posteriormente con otras cuentas propiamente tales, en las que asegura que se funda la de que se trata, y que deberán estar en el papel sellado que dispone la ley; y por consiguiente, la del escrito no es la cuenta "girada" entre particulares "para el efecto de cobrar su importe", segun se expresa en el artículo 36 de la ley de 14 de Febrero, y que son las que deben estar escritas en el papel especial de su clase: Considerando 4º: que respecto de todos los documentos que se insertan en el cuerpo de un escrito, sin otro carácter que el de piezas instructivas del mismo, basta para satisfacer la prevencion de la ley, que se presenten con el sello de actuaciones que establece la fraccion 6ª del artículo 17, para todo memorial, ocurso ó representacion dirigida á cualquiera autoridad. Considerando 5º: que la interpretacion usual y constante de las leyes que reglamentan el uso del papel sellado, ha permitido que las operaciones numéricas que se practican en las demandas de cantidades (que son las mas comunes) se escriban en el mismo papel del escrito, sin

que se haya visto que se exijan dos sellos diversos, el de actuaciones para este, y el de facturas y cuentas para las operaciones aritméticas que en él se mencionan y le sirven de fundamento ó de explicacion; ni menos que el no hacerlo así se haya reputado como fraude de la renta de papel sellado y castigándose con la pena de cinco por ciento que impone el artículo 51. Por estas consideraciones, con fundamento de la citada fraccion 6ª del artículo 17 y del artículo 36 de la ley de 14 de Febrero de 1856, que determina restrictivamente las cuentas y facturas que deben ponerse en el sello de su clase, este tribunal falla: Primero: como pide el O. Promotor Fiscal, se revoca el fallo apelado de 2 de Setiembre de 1871, del juez de Distrito de San Luis Potosí, que condenó á D. Manuel Rascon á la multa de cinco por ciento sobre la cantidad de veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos diez y seis centavos. Segundo: desglósese el documento de depósito, de fojas 12 del expediente, y devuélvase al interesado. Y por cuanto á que el juez de Guadalcázar, O. Antonio B. Toscano, está obligado á depurar en juicio su conducta por haber declarado en el auto de 1º de Julio que debia multarse lo que él llama "el documento," sin consultar con asesor, siendo juez lego; por haberlo hecho sin que procediera el juicio y la audiencia correspondiente, y excediéndose de las atribuciones que le concede el artículo 37 de la ley de 22 de Mayo de 1834, así como tambien por la mutilacion que hizo del escrito de Rascon, segregando una parte de él en la certificacion de fojas 5, dando á entender que era un documento separado, presentado con el escrito de demanda; compúlsense testimonios de este mismo escrito, del de denuncia de Zubiaga, del citado auto de 1º de Julio y de la referida certificacion de fojas 5, y dese vista con todo al O. Promotor Fiscal, para que por cuer-

da separada promueva lo conveniente. Notifiquese este fallo y elévense los autos á la Suprema Corte de Justicia de la Nación, segun lo prevenido en la ley de 14 de Febrero de 1826. Así lo proveyó el C. Lic. Víctor Covarrubias, primer Magistrado suplente de este Tribunal de Circuito, por recusacion del propietario, y lo firmó.—*V. Covarrubias.—Ramon Reynoso.*

PEDIMENTO DEL C. FISCAL.

El Fiscal dice: que habiendo demandado el Sr. D. Manuel Rascon, en juicio ordinario, á D. Ramon Zubiaga el pago de una cantidad de pesos, Zubiaga formuló á su vez un artículo de previo y especial pronunciamiento, ante el juez 2º constitucional con funciones de juez de 1ª instancia del mineral de Guadalcázar, en el Estado de San Luis Potosí. Ese artículo versaba sobre el denuncia que Zubiaga hizo de una infraccion de la ley del papel sellado, cometida, segun el denunciante, por Rascon, presentando en el litigio que le habia promovido á Zubiaga una cuenta en papel sellado; pero no del que correspondia, atendida su naturaleza.

Terminado el incidente en 1ª instancia, se declaró que en efecto D. Manuel Rascon era culpable, y en consecuencia se le condenó al pago de un cinco por ciento sobre la suma mayor del cargo, que es la de veinticinco mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos, diez y seis centavos; previniéndole al Promotor fiscal promoviera lo conveniente contra los funcionarios que hubieren admitido dicha cuenta, como á los demas que hubiesen incurrido en la pena que designa la ley.

De ese fallo apeló Rascon, y en la 2ª instancia se pronunció la sentencia que en lo conducente dice: "1º: Como pide el C. Promotor fiscal, se revoca el fallo

apelado de 2 de Setiembre de 1871, del juez de Distrito de San Luis Potosí que condenó á D. Manuel Rascon á la multa de cinco por ciento sobre la cantidad de \$ 25,444 16 centavos. 2º: Desglóse el documento de depósito de fojas 12 del expediente y devuélvase al interesado. Y por cuanto á que el juez de Guadalcázar C. Antonio B. Toscano, está obligado á depurar en juicio su conducta, por haber declarado en el auto de 1º de Julio que debía multarse lo que él llama "documento", sin consultar con asesor siendo juez lego, sin haberlo hecho sin que precediera el juicio y la audiencia correspondientes y excediéndose de las atribuciones que le concede el artículo 37 de la ley de 22 de Mayo de 1834: así como tambien por la mutilacion que hizo del escrito de Rascon segregando una parte de él en la certificacion de fojas 5, dando á entender que era un documento separado presentado con el escrito de demanda; compúlsense testimonios de este mismo escrito, del de denuncia de Zubiaga, del citado auto de 1º de Julio, y de la referida certificacion de fojas 5 y dése vista al Promotor fiscal, para que por cuerda separada promueva lo conveniente."

Tal es el fallo que el C. Magistrado del Circuito de Guadalajara pronunció en el presente negocio, y el Fiscal entiende que es de confirmarse en sus dos primeros puntos. Para justificarlos, el suscrito reproduce aquí los fundamentos legales en que tanto el Promotor fiscal, como el Tribunal de Circuito, se apoyaron, el uno para pedirlos, y el otro para sentenciar en ese sentido. Pero respecto del último, el que suscribe no está completamente de acuerdo. El bien comprende que es rigurosamente justo, pero hay varias razones de equidad y aun de conveniencia pública que aconsejan se mitigue ese vigor. En la conducta del juez de Guadalcázar no hay una culpabilidad tal, que merezca por ella suje-

SEMANARIO JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

tarlo á un juicio y hacerle sufrir las trascendentales consecuencias, que solamente la sustanciacion del proceso, pudiera acarrearle. En efecto, el decreto de las Cortes Españolas que hemos reconocido como vigente para exigir la responsabilidad de los jueces, llegado el caso, inspira en varios de sus artículos cierta lenidad con los jueces en sus primeras faltas; y únicamente se muestra severo, contra aquellos que, falseando su conciencia, por aversion á uno de los litigantes, por seducción ó por cohecho ó soborno faltan contra derecho, y tambien contra los que por su conducta inmoral y escandalosa, han descendido al nivel de un vicioso ruin y vulgar.

Pues en ninguno de estos casos se encuentra D. Antonio Toscano; sus faltas han dimanado de lo mucho que se preocupó con este negocio, por tratarse de una suma considerable, defraudada en su opinion, al erario nacional, y esa preocupacion que le hacia caminar en este negocio como sobre ascuas, le hizo incurrir en los defectos de sustanciacion advertidos por el Tribunal de Circuito de Querétaro.

Esto se comprende por la simple lectura del auto que dictó, por su calidad de lego en la ciencia del derecho y en la mas cumplida aun, de la dejuzgar y hacer justicia: todo lo cual indudablemente lo excusa.

Pero no es esto todo: en la actualidad hay una razon de conveniencia pública que exige ser aun mas tolerantes todavía con los jueces, que lo eran los legisladores de 1813.

Hoy, ningun juez tiene el aliciente de las costas que le excite á aceptar un cargo de suyo difícil y espinoso, al paso que los pagos públicos son ahora demasiado inciertos. Así pues, si en el dia hacemos del cargo judicial, un puesto en que sea muy fácil, y por lo mismo muy frecuente incurrir en responsabilidades, llegará vez en que apenas se encontrará un hombre que quiera servirlo, y esto acaecerá

en un país cuyo territorio es vastísimo, y en el que por sus mismas instituciones, ha de haber aun en las poblaciones mas pequeñas y mas apartadas de las capitales, un representante de la justicia.

Mas de lo dicho no se infiera que este Ministerio quiere que esa Corte Suprema, por ser indulgente con Toscano, sea tal vez injusta con Rascon, que acaso habrá sufrido algunos daños y perjuicios con la conducta improcedente del primero; por lo contrario, el Fiscal pretende combinar lo uno con lo otro, y á su juicio esto se consigue haciendo al juez D. Antonio Toscano una demostracion severa que lo haga mas advertido para lo adelante, dejándole á Rascon enteramente á salvo sus derechos para reclamar en tiempo y forma de quien corresponda la reparacion de los daños y menoscabos que haya resentido con motivo del presente negocio.

Por tanto, el suscrito concluye con las siguientes proposiciones que desde luego sujeta á la deliberacion de esa 1.^a Sala:

Primera: por sus propios y legales fundamentos se confirma la sentencia que con fecha 16 de Marzo próximo pasado, pronunció el Tribunal de Circuito de Querétaro, en sus puntos primero y segundo.

Segunda: se revoca esa misma sentencia, en su punto tercero, que previene al Promotor fiscal promueva lo conveniente, á fin de que el Juez D. Antonio B. Toscano, depure en juicio su conducta.

Tercera: se amonesta seriamente á dicho juez Toscano, por las faltas que en el presente negocio ha cometido, apercibiéndolo de mayor demostracion en caso de reincidencia.

Cuarta: se dejan á D. Manuel Rascon, á salvo los derechos que pueda tener para reclamar, de quien haya lugar, los daños y perjuicios que justifique haber recibido con ocasion del presente negocio.

México, Junio 19 de 1872.—Altamirano.

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio 8 de 1872.—Vistas las diligencias practicadas ante el Juzgado de 1ª instancia de Guadalcázar y el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, que se prosiguieron ante el Tribunal de Circuito de Querétaro, contra Don Manuel Rascon por infracción de la ley de papel sellado, á las que dió lugar D. Manuel Zubiaga en el juicio que sobre pesos le promovió el Lic. D. Benigno Ariola, apoderado de Rascon; lo pedido por el Ministerio público ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí y ante el Tribunal de Circuito de Querétaro: las sentencias pronunciadas por aquel Juzgado y ese Tribunal: lo dicho ante esta 1ª Sala por el Sr. Fiscal y todo lo demas que convino; Considerando: que la denuncia de Zubiaga relativa á que Rascon infringió la ley del papel sellado, procede de que se comprendió una cuenta en el escrito de la demanda de este, debiendo, segun Zubiaga, presentarse cuenta separada puesta en papel sellado para cuentas: que la comprendida en el escrito de demanda solo es la expresion de diversas cantidades en que se hace consistir la total que se demanda, y por lo mismo no puede reputarse como una cuenta girada entre particulares para el efecto de cobrar su importe, á cuya clase de cuentas se refiere al artículo 36 de la ley de 14 de Febrero de 1856, para que se extienda en papel del sello especial para el cobro de su importe, cuyo sello señalan los artículos 32, 33, 34 y 35 de la misma ley: que el escrito de demanda de Rascon está extendido en papel del sello que corresponde segun la fraccion 6ª del artículo 17 de la misma ley: que con arreglo á ella es práctica comun y constante, que los escritos en que se expresan cantidades, ya para demanda, ya para contestar, ó ya para otros objetos, se extienden en papel sellado para actua-

ciones y no en el sellado para cuentas, lo cual no se ha considerado ni se considera como infraccion de ley: que en consecuencia, la denuncia de Zubiaga está destituida de razon legal y ha servido para demostrar la secuela del juicio promovido contra él, lo cual cede en contra de la pronta administracion de justicia: Considerando ademas: que si el juez de Guadalcázar ha procedido de modo que tenga que formalizarse respecto de él algun procedimiento, como lo ha dispuesto la sentencia del Tribunal de Circuito de Querétaro, una vez compulsado como lo ha sido el testimonio que previene para que el promotor promueva por cuerda separada sobre ese particular, se tiene que esperar por esta Sala el resultado para proceder á lo que haya lugar, por los fundamentos expresados, se decreta.

Primero: que de conformidad con lo pedido por el Sr. Fiscal, se confirma la sentencia pronunciada el 16 de Mayo último por el Tribunal de Circuito de Querétaro, en la parte que revoca el fallo del juez de Distrito de San Luis Potosí, pronunciado el 2 de Setiembre del año anterior, que condenó á D. Manuel Rascon al pago de una multa de cinco por ciento, sobre la cantidad de veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos, diez y seis centavos; confirmandose igualmente la sentencia del Tribunal de Circuito en la parte que dispone que se desglose del expediente el documento de depósito que obra á fojas 12 para que se devuelva al interesado, y quedando este, en consecuencia, libre del pago de la multa.

Segundo: que se condena á Don Ramon Zubiaga al pago de todas las costas legales del juicio relativo á la multa.

Tercero: que se reserva esta Sala resolver lo que sea de justicia, respecto del procedimiento relativo á la conducta que en el negocio ha observado el juez de Guadalcázar, D. Antonio B. Toscano, cuan-

do venga el juicio respectivo mandado formar por el Tribunal de Circuito de Querétaro.

Cuarto: que se devuelvan á dicho Tribunal las actuaciones de 1ª y de 2ª instancia con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes. Hágase saber y archívese á su vez el Toca de esta Sala.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CO. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*M. Zavala.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Agosto 6 de 1872.
Lic. Agustín Peralta.

AMPARO de garantías promovido por Pánfilo Doroteo, ante el Juzgado 1º de Distrito de México, por haber sido consignado al servicio de las armas contra su voluntad.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez:

El Promotor dice: que el presente juicio de amparo fué promovido por el C. Pánfilo Doroteo, quejándose de que el 23 de Abril último fué tomado de leva, contra su voluntad, violándose la garantía que concede el art. 5º constitucional. Recibido el juicio á prueba, ha comprobado que es vecino de Lerma, que tiene satisfechas sus contribuciones, y es honrado y padre de familia. En la fecha que fué tomado de leva estaba vigente la ley de facultades extraordinarias y suspensa la garantía reclamada; pero es un hecho que con fecha 27 de Marzo se publicó la orden á que se refiere el quejoso, suspendiéndose la leva. Este fué aprehendido en un pueblo del Estado de México, mas la consignación se hizo en la capital, y por lo mismo debe considerarse

amparado por la orden que suspendió la leva, pues de otra manera no podía ser dado de alta sino como reemplazo y remitido por el gobierno del Estado de México, por cuenta del contingente del Estado. Además, como falta el informe de la autoridad, no consta la autorización con que fué aprehendido, y en este punto, sin que sea una ejecutoria la resolución de la Suprema Corte en caso idéntico, el Juzgado debe fijar su atención en lo determinado por ese Tribunal en el amparo de José María Morales, que lo obtuvo porque el C. coronel del cuerpo que lo aprehendió, lo hizo sin conocimiento de la superioridad.

Por lo expuesto, puede el Juzgado declarar: que la Justicia federal ampara á Pánfilo Doroteo.

México, Junio 24 de 1872.—*Herrera Campos.*

SENTENCIA del C. Juez de Distrito.

México, Junio 29 de 1872.—Visto el recurso de amparo promovido por Pánfilo Doroteo, quejándose de que contra su voluntad se le destinó al servicio militar en el batallón núm. 4, violándose con tal hecho la garantía consignada en el artículo 5º de la Constitución política de la República mexicana, y Considerando: que con el certificado de fojas 1ª y testigos examinados, en el término de prueba acreditó el quejoso ser casado, hombre de bien y padre de familia, á la que sostiene con el producto de su trabajo; cubriendo además las contribuciones que le corresponden, y prestando los servicios que son de costumbre en el pueblo de Tlamimilalpa, del que es vecino. Que sin embargo de estar en 23 de Abril último, fecha de la aprehensión de Pánfilo Doroteo, investido el Ejecutivo de facultades extraordinarias, y suspensa, en consecuencia, la garantía que reclama, ni consta la autorización con